

TESIS DOCTORAL.- USAL

EL RECURSO DE CASACION Y LA SENTENCIA ARBITRARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

Por Ernesto A.A. García Maañón.-

ANTECEDENTES.-

La reforma del proceso penal bonaerense instaurada por la ley 11.922 con el nuevo Código de Procedimiento, cuya vigencia comenzó parcialmente con el funcionamiento del Tribunal de Casación, - creado por ley incorporada como anexo de la 5.827 -, obedeció esencialmente a la imperiosa necesidad de transformar un sistema obsoleto por los niveles de lentitud e ineficacia en que se hallaba inmerso el servicio de justicia. Por ello, siguiendo la corriente imperante en los códigos procesales de Córdoba, Tucumán y la Nación, entre otros, se adoptó un sistema de corte netamente garantista, poniendo en cabeza del Ministerio Público, - léase fiscales en sus distintas jerarquías -, el ejercicio de la acción pública y adhiriendo a la oralidad de instancia única en la etapa del juicio. Esta orientación deviene tan evidente que, así como el Código Lofré comenzaba su articulado aludiendo a la defensa en juicio, el actual denomina al Título I "Garantías fundamentales, interpretación y aplicación de la ley", refiriéndose el artículo primero al juez natural, juicio previo, principio de inocencia, *non bis in idem*, inviolabilidad de la defensa y el principio de *favor rei*.

Asimismo, en la resolución 23 de la Subsecretaría de Justicia, se consignaba que, atento a las reformas constitucionales en el orden nacional y provincial, se tornaba necesario otorgar capacidad operativa a las diversas normas contenidas en tratados internacionales e incorporadas al orden jurídico positivo interno, refiriéndose esencialmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, - más conocida como Pacto de San José de Costa Rica -, que regula un elenco de garantías que deben ser respetadas por la legislación procesal penal de los países signatarios. Dichos principios del debido proceso penal son: I) Legalidad; II) Igualdad; III) Publicidad; IV) Invalidez de la confesión obtenida bajo coacción; V) Principio de inocencia, el cual comprende: a) inviolabilidad del derecho de defensa; b) restricciones a la libertad personal como medida cautelar; c) exclusión de la carga probatoria; d) *in dubio pro reo*; VI) Debido proceso, constituido esencialmente por: a) juez natural, b) plazo razonable; c) derecho a ser oído con las debidas garantías; VII) Inviolabilidad del derecho de defensa que abarca: a) defensa material; b) defensa técnica; c) comunicación con el defensor; d) información; e) posibilidad de reacción; f) posibilidad de recurrir; VIII) Libertad y seguridad; IX) *Habeas corpus*; X) Indemnización por error judicial; XI) Principios de legalidad, personalidad, humanidad y racionalidad de la ejecución penal y

XII) *Ne bis in idem*, (conf. Minvielle, Bernadette, "La Convención americana sobre Derechos Humanos y el enjuiciamiento penal", Doctrina Penal, Ed. Depalma, 1988)

Una importante novedad del nuevo Digesto reside en el principio acusatorio, caracterizado por el monopolio del ejercicio de la acción pública a cargo del Fiscal, quien, a través de una instrucción denominada investigación penal preparatoria, indaga sobre la existencia del fundamento necesario para efectuar una acusación formal requiriendo la elevación de la causa a juicio o, en caso contrario, solicitando el sobreseimiento. En el supuesto de prosperar la persecución penal, el caso ingresa en la órbita jurisdiccional del Juzgado en lo Correccional, el cual entiende en los delitos de menor gravedad, o deviene competencia del Tribunal en lo Criminal, órgano colegiado de instancia única encargado de dictar sentencia mediante un juicio oral y público, valorando la prueba rendida mediante el sistema de las libres convicciones o sana crítica racional; sin perjuicio de la facultad de las partes de consensuar la aplicación en ciertos casos del juicio abreviado, procedimiento escrito en el que, previa homologación por el Tribunal, se acuerda un tope de pena del cual el Juzgador no puede apartarse, sin que ello obste al arribo de un veredicto absolutorio.

Se destaca también, entre otras innovaciones, la figura del Juez de Garantías, magistrado encargado de velar por la correcta aplicación de los principios del debido proceso y el respeto por las garantías constitucionales durante la etapa de la investigación penal preparatoria.

En esta etapa procesal, el nuevo ordenamiento se diferencia con nitidez del sistema inquisitivo imperante en el Código Jofré, donde existía identidad entre el juez instructor y el magistrado sentenciante, régimen ampliamente criticado por la doctrina nacional, en concordancia con las tendencias internacionales más avanzadas en la materia, (conf. Vázquez Rossi, Jorge, "Derecho Procesal Penal"; Hortel, Eduardo, "Código de Procedimiento Penal Comentado"; Bertolino, Pedro, "Código de Procedimiento Penal Comentado"; entre otros). Tal diferencia redundaba en beneficio de una mejor justicia, pues, como acertadamente expresa Chiara Díaz, : "...se ha venido verificando una concreta pérdida de imparcialidad por el juez quien, sobre todo en la etapa instructoria, se ha convertido en un sujeto que toma partido, en función de lo que él cree que es el objetivo de reconstruir la verdad histórica más acorde con la sensación que el mismo percibe a través de la investigación policial, o de la propia investigación que está llevando a cabo en la etapa instructoria...", (conf. aut. cit., "Hacia el Proceso Penal del siglo XXI", en "Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Comentado; autores varios", pág. 26); en consecuencia, la división jurisdiccional de tareas, consistente en un juez con intervención en la etapa preliminar, limitado a asegurar el debido proceso, que dispone las medidas cautelares y restrictivas de la libertad o de todo otro derecho amparado por la norma constitucional o de rango equivalente, - como los tratados internacionales incorporados a la Carta Magna -, controlando la actividad de las partes y velando por la incolumidad de la defensa en juicio, se complementa con un órgano judicial colegiado, - Tribunal en lo Criminal -, cuya esfera potestativa es la etapa del juicio, con sus caracteres de oralidad, publicidad, inmediatez, continuidad y contradictorio, dictando veredicto y sentencia definitiva en instancia única, con la posibilidad de ser recurrida por la vía extraordinaria de la



Casación y, eventualmente, la Suprema Corte. Así, es sencillo advertir la mayor imparcialidad del sistema, que garantiza el examen de la cuestión por jueces distintos en cada etapa, evitando que un magistrado resulte el propio árbitro de su actividad instructoria, en la cual, conocemos por experiencia, difícil es que absuelva en una causa en la que ha dictado prisión preventiva en el estadio preliminar.

En el Digesto ritual vigente, la acción pública, regida por el principio de legalidad con algunas excepciones, es promovida y ejercida por el Ministerio Público a través del Agente Fiscal, (art. 56), funcionario encargado de practicar la investigación preliminar que decidirá la elevación o no a juicio de las actuaciones, interviniendo, en caso afirmativo, el Fiscal de Juicio quien será el que promueva la acción en esta fase, tratando, con un criterio objetivo que no excluye pronunciarse a favor del imputado, de demostrar su culpabilidad.

Así las cosas, la innovación de mayor rango consiste en la implementación del juicio oral, con su estructuración en orden a actos de postulación, acreditación, alegación y decisión, (conf. Vázquez Rossi, "Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Comentado, autores varios", pág. 184 ), en el cual el Tribunal evaluará la prueba producida a través del sistema de la libre convicción o sana crítica racional, consistente en la valoración obediente sólo a pautas de logicidad y recto entendimiento humano, (conf. De La Rúa, "Teoría General del Proceso", pág. 154), en las cuales debe reposar su motivación expresada por escrito, acorde con la ley fundamental de coherencia contenida en los principios de identidad, contradicción y tercero excluido, sin olvidar la norma de derivación de donde emana el precepto de razón suficiente, del cual se extrae que toda conclusión, para ser verdadera, necesita una razón suficiente que justifique lo afirmado o negado con pretensión de verdad.

Los órganos jurisdiccionales encargados de la etapa del juicio separan su competencia en la materia Correccional y Criminal, diferenciándose por resultar el primero a cargo de un magistrado que entiende en: a) los delitos cuya pena no sea privativa de libertad; b) los delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo no exceda de tres años; c) en carácter originario y de alzada respecto de faltas o contravenciones municipales, policiales o administrativas, según lo dispongan las leyes pertinentes; y d) en la queja por denegación de los recursos en ellas previstos; (art. 24 Cód. Proc. Penal).

El Tribunal en lo Criminal, como su denominación lo indica, es un órgano colegiado de tres integrantes cuya competencia material lo habilita a entender, en única instancia, de los delitos no atribuidos a otro organismo jurisdiccional, como lo norma el artículo 22 del Ritual.

Ambos operadores judiciales actúan en la órbita del juicio propiamente dicho, es decir del contradictorio, rigiendo en los dos casos la oralidad, con los mismos principios e implementación en el desarrollo del debate y la decisión final.

También contempla el nuevo ordenamiento la figura del Juez de Ejecución, magistrado a cargo de todo lo relativo al cumplimiento de la pena, cuya efectiva implementación todavía no se ha visto cristalizada, cumpliendo esas funciones el Juez Correccional o Presidente del Tribunal en cada caso. La creación de dicha figura responde a las más modernas tendencias en la materia, que se inclinan a dejar los problemas del cumplimiento de la pena y readaptación social del condenado en manos de un magistrado autónomo, con competencia exclusiva en este aspecto de la cuestión.

Otro importante adelanto lo constituye la creación del Tribunal de Casación, órgano colegiado cuya función principal es entender en el recurso homónimo y en la acción de revisión, tema que abordaremos en profundidad en el transcurso del presente trabajo.

Respecto al régimen de nulidades, el nuevo ordenamiento ha eliminado su interposición por vía de recurso, regulando lo concerniente a estas sanciones procesales en el Título VII y estableciendo tácitamente su división en absolutas y relativas. Las primeras resultan aquellas que recaen sobre actos que conculcan algún derecho o garantía constitucional, especialmente la defensa en juicio, debiendo ser declaradas *ex officio* por el órgano judicial que las compruebe, (art. 203, *in fine*), sin que se aplique el principio *nemo auditur turpitudinem suam allegans* por su misma importancia y los valores que vulnera su existencia.

Con respecto a las nulidades relativas, en concordancia con las tendencias legislativas más modernas, se advierten los siguientes caracteres esenciales: a) sólo pueden articularse por la parte que posea interés procesal en sanear el acto y, b) pueden subsanarse por la aceptación tácita de los efectos del acto por parte del interesado, o cuando éste emplea las consecuencias del acto anulable. En este aspecto de la cuestión, considero que debería haberse suprimido la posibilidad de recurrir este tipo de nulidades por vía de la apelación, - sistema que, como ya se advierte, acarrea numerosas dilaciones al proceso de la investigación preparatoria -, dejando subsistente el recurso de reposición como única vía de impugnación, toda vez que las mismas características de estas nulidades tornan altamente improbable un gravamen que no pueda ser reparado durante el transcurso del proceso, especialmente si recordamos que la afectación de una garantía o derecho constitucional, - materia de las nulidades absolutas -, debe ser declarado de oficio o puede ser petitionado por cualquiera de las partes en cualquier estado y grado del proceso, (arts. 203 y 204 CPP).

Por último, es importante destacar que las nulidades relativas tienen una ocasión procesal de interposición, bajo sanción de caducidad, (art. 205), mientras que las absolutas pueden ser declaradas de oficio o reclamadas en cualquier etapa del proceso, característica que, como analizaremos más adelante, se relaciona estrechamente con el recurso de casación.



Adviene importante destacar que el código adolece de una regulación clara de la etapa intermedia como en el ordenamiento anterior, empero, ella puede "...ser reconstruida dogmáticamente sobre la base de las disposiciones referidas a la citación a juicio (arts. 334 a 337 CPP), vinculadas con las relativas al sobreseimiento, (arts. 321 a 327 CPP)...", como bien expresa Ariel H. Villar, (conf. "Introducción a la reforma penal bonaerense", en "Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires", ed. Némesis, pág. 15).

En relación al sobreseimiento, dicha providencia tornó su anterior división en definitivo y provisorio por la de total, - el anterior definitivo -, y parcial, que comprende una parte de la causa. Entendemos que dicha modificación significa un positivo avance en la sistemática procesal, habida cuenta la tendencia de los jueces a dictar una resolución de carácter provisional en la mayoría de los casos, con las consecuencias de incertidumbre y mora judicial que, en definitiva, redundaban en perjuicio del justiciable. Así, esta resolución puede ser requerida al Juez de Garantías en la etapa anterior al juicio por el Agente Fiscal, el imputado y su Defensor, (art. 321 CPP), procediendo su dictado cuando: a) la acción penal se ha extinguido; b) el hecho investigado no ha existido; c) el hecho atribuido no encuadra en una figura legal; d) el delito no fue cometido por el imputado, y e) media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria, (art. 323 CPP). Puede ser recurrido por la parte agraviada mediante el recurso de apelación, (art. 439 CPP).

También en el juicio puede dictarse el sobreseimiento con el objeto de, - como bien expresan Sosa Arditi y Fernández -, "...evitar el desgaste jurisdiccional que implicaría la celebración de un debate, cuando la ley sustantiva impone exención de pena...", (conf. aut. cit en "Juicio oral en el proceso penal", citados por Bertolino en "Código Procesal Penal Prov. Bs. As.", Comentado, pág. 388). En tal ocasión procede por nuevas pruebas aparecidas con posterioridad a la audiencia del art. 338, las cuales demuestren con fehaciencia que el imputado obró en estado de inimputabilidad, o que surja claramente la falta de tipo, una causal de justificación, de inculpabilidad o una causa extintiva de la acción penal, para cuya comprobación no sea necesario el debate. Obviamente, rige aquí, como en cualquier fase del proceso, el sistema de las libres convicciones para la apreciación de la prueba. Con respecto a la impugnabilidad de este sobreseimiento, estimamos que de la interpretación armónica de los arts. 341 y 429 surge que sólo puede ser recurrido ante el Tribunal de Casación.

Respecto al régimen de las impugnaciones, el código, en el sendero de los más recientes ordenamientos procesales nacionales, (código de la Nación, Tucumán, Córdoba, entre otros), regula una parte general y luego establece los siguientes recursos: reposición (arts. 436 a 438), apelación (arts. 439 a 447), casación (arts. 448 a 466), la acción de revisión (arts. 467 a 478) y los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte Provincial, adhiriendo al concepto de taxatividad, como bien hace notar Bertolino (ob. cit. pág. 476); es decir que sólo puede recurrirse mediante los remedios procesales contenidos en la ley ritual.

En este aspecto, las innovaciones aparecen con nitidez en relación al código anterior, desapareciendo los recursos de queja, de aclaratoria y de nulidad; eliminando el recurso de apelación en la etapa del juicio, pasando a impugnarse la sentencia sólo por la vía extraordinaria de la casación, limitada a la aplicación del derecho y quedando excluida la apreciación de los hechos y la valoración de la prueba, salvo determinados casos de absurdo o arbitrariedad manifiesta, cuya exclusión repugnaría a la Convención de Costa Rica, Ley Suprema conforme a los artículos 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, aprobada por ley 23.054, habida cuenta lo normado en el inciso h, apartado 2º, que expresa: "Toda persona tiene derecho en pie de igualdad de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior" y que será materia de la presente tesis. No obstante ello, podemos adelantar en este punto la existencia de dos posiciones antagónicas al respecto: una que considera a la doble instancia requisito ineludible para toda resolución judicial, especialmente la sentencia definitiva, toda vez que el recurso extraordinario, por sus propias limitaciones, no evitaría incurrir en el defecto de privación de justicia en infracción a la Convención citada, como expresa Bidart Campos, (conf. "La doble instancia en el proceso penal" E.D. n° 6464, 14/4/86); y otra postura, predominante en los autores de la reforma, que sostiene que en un proceso mixto de instrucción preparatoria escrita y juicio oral, con un recurso de casación amplio, especialmente en lo referente a la inobservancia o errónea aplicación de la ley de fondo y a los vicios sancionables del procedimiento con la oportuna reserva de recurrir, se satisface el Pacto de rango constitucional, especialmente considerando que el inciso h, apartado 2º, no hace distinción entre medios ordinarios y extraordinarios, y, "...para este tipo de proceso penal estos últimos permiten efectuar un control integral y razonable de lo resuelto en la instancia a quo, adecuado a sus características especiales y sin menoscabo de los derechos del acusado...", (conf. Carlos A. Chiara Díaz, "Código Procesal Penal de la Provincia de Bs. As., Comentado", pág. 366/367).

Adelantando nuestra modesta opinión, consideramos que debe otorgarse un alcance amplio al art. 448 del Ritual, especialmente en los casos de interpretación absurda o arbitraria de los hechos o la prueba por el Tribunal de grado, habida cuenta que una exégesis más restringida lesionaría el precepto mencionado *supra*, afectando el derecho de defensa en juicio y, en consecuencia el debido proceso, considerando también que se estaría violando el art. 210 del Código de Procedimiento que exige el desarrollo escrito de las razones que motivan la convicción sincera sobre la verdad de los hechos y, por carácter transitivo, el mencionado art. 448 del rito y el art. 171 de la Constitución Provincial, que sienta las bases para el fundamento de las sentencias judiciales.

Así, deviene importante también que el *ad quem*, - Tribunal de Casación -, diferencie entre el análisis de la admisibilidad de la impugnación respecto al ingreso ilegal de prueba al juicio y el mérito de la evaluación de las constancias probatorias, el cual, excepcionalmente, puede advenir materia de casación, como en los casos de sentencias arbitrarias o fundadas en razonamientos absurdos.



No obstante coincidir con D'Elia y otros destacados comentaristas en que la introducción por vía de casación de nulidades de carácter sustancial, - contraviniendo la taxatividad del art. 201 del Código -, afecta la correcta sistemática legislativa y con seguridad recargará la tareas del Tribunal, me permito disentir en lo relativo a la supuesta amplitud conferida al recurso, pues su carácter de excepcionalidad debe compadecerse con los principios sentados en la Convención de Costa Rica, resguardando el derecho de los justiciables a que las sentencias que los afecten sean objeto de revisión por un órgano jurisdiccional superior, tema que también trataremos en extenso más adelante.

En relación al juicio propiamente dicho y al recurso de casación, -principales novedades del sistema y materia de este trabajo-, haremos una breve reseña conceptual que permitirá ingresar al tema principal haciendo honor a una adecuada sistemática.

El elenco de tareas de investigación que conforman el ejercicio liminar de la acción penal pública, reconocen su propósito en la determinación de elevar la causa a juicio, configurando la celebración del debate la iniciación del juicio propiamente dicho al entablarse el contradictorio con sus presupuestos de acusación, defensa, prueba y sentencia. Asimismo, el desarrollo del debate debe responder a ciertas características como oralidad, publicidad, libre actividad partiva, - con amplia posibilidad de proposición, discusión y producción de prueba -, concentración, inmediatez, continuidad y equidad, las cuales constituyen la garantía del debido proceso con el cumplimiento del aforismo *nulla culpa sine iudicio*, que permitirá al poder jurisdiccional pronunciarse con fuerza de ley de manera definitiva sobre el litigio.

Ya advertimos que la etimología de la voz latina *iudicio*, implica una actividad lógico-racional destinada a distinguir lo verdadero de lo falso, culminando en la afirmación o negación respecto de algo, como señala Ferrater Mora, (conf. "Diccionario de filosofía", t.I, p. 1033, cit. por Vázquez Rossi en "Derecho Procesal Penal", t. II, p. 401). En consecuencia, siguiendo a Jacques Maritain, entendemos que al devenir el objeto del juicio en la distinción de lo verdadero de lo que no lo es, debe emplearse la lógica como ingrediente esencial de su construcción, habida cuenta que esta parte de la filosofía "...tiene por objeto el ser de razón que dirige nuestro espíritu a la verdad..." (conf. aut. cit., "Introducción a la Filosofía", ed. Club de lectores, pág. 128). Ahora bien, es importante destacar que previo a esta actividad que constituye el núcleo del proceso, existe una etapa intermedia que implica un antejuicio destinado a declarar la procedencia formal de la imputación, - léase acusación fiscal -, desencadenando los actos procesales que culminarán en un pronunciamiento de mérito, absolutorio o condenatorio, imponiendo, - en este último caso -, una sanción a través de una sentencia judicial que constituirá "el fundamento de la actuación del poder penal material del Estado", como con precisión define Maier, (conf. "Derecho Procesal Penal", pág. 478)

Así las cosas y aceptando que el juicio tiene como objeto el "...establecimiento racional de la verdad judicial..." (conf. Vázquez Rossi, ob. cit. p.403 ), éste se logra mediante la sentencia o pronunciamiento jurisdiccional sobre todas las cuestiones planteadas, que deriva de la conclusión lógica motivada en premisas originadas en la prueba producida y la ley anterior al hecho del proceso.

Asimismo, puede dividirse al juicio en a) escrito; b) oral; c) por jurados; d) a cargo de un juez o tribunal técnico en su totalidad y e) escabinado, sin olvidar la esencial clasificación de sistemas procesales en inquisitivo, acusatorio y mixto, identificándose generalmente el primero de ellos con el escrituralismo y la oralidad con el mencionado en segundo término. El escrituralismo responde generalmente al conocido como sistema inquisitivo, pues es el que mejor se compadece con los principios de dicho procedimiento. En efecto, el proceso inquisitivo encuentra sus antecedentes en los regímenes autoritarios en el marco de un estatismo centralizado, y tiende a fortalecer la autoridad institucionalizada creando un modelo que permite indagar, - a veces con escasas garantías -, todo aquello que signifique un riesgo para el poder. Su más lejano antecedente lo encontramos en el derecho imperial romano, utilizado principalmente para perseguir a los enemigos del poder. A través de las épocas y con la evolución del derecho procesal y el paulatino reconocimiento de las garantías de los acusados de delitos, fueron atenuándose ciertas características arbitrarias y monopólicas que lo distinguían, conservando no obstante ello, una gama definida de coincidencias substanciales que permiten vislumbrar su perfil con claridad.

El concepto esencial en materia de delito era el incumplimiento de las órdenes y mandato de la autoridad, orientándose el procedimiento a la obtención de la verdad real con caracteres apodícticos, sin que tuvieran relevancia los medios de obtención de ese magno objetivo. En consecuencia, el procedimiento para conseguir tal fin debía necesariamente obedecer a pautas de secreto, desconfianza y confusión entre la acción y jurisdicción a través de la identidad de sus órganos. Estos orígenes dejaron rastros profundos en la legislación de países con antecedentes de absolutismo estatal, y, en nuestro ordenamiento jurídico con la vigencia del Código Procesal Penal para la justicia federal de 1888, cuyas sucesivas reformas no pudieron reparar la decadencia del sistema.

Los rasgos que distinguen al sistema inquisitivo pueden resumirse en los siguientes: a) acción y jurisdicción a cargo de un mismo órgano, limitándose la actuación de las partes en la etapa instructoria o de averiguación, b) iniciación de oficio ante la *notitia criminis*; c) actos documentados por escrito en prolongadas etapas rodeadas de secreto y discrecional actuación del instructor; d) sistema de pruebas legales o tarifadas; e) protagonismo activo de los jueces a cargo de la instrucción, quienes a veces son los encargados de dictar sentencia en el plenario; f) estadios procesales bien definidos a través de autos emanados del órgano jurisdiccional.

El sistema acusatorio, relacionado íntimamente con la democracia y la república, reconoce su mayor expresión en el derecho anglosajón, sentando sus cimientos en la Carta Magna inglesa (Bill of Rights) de 1215, donde los barones impusieron al rey John Plantagenet, (Juan Sin Tierra), la declaración respecto a



que el poder de juzgar pertenecía a los pares, "...idea que se reafirma en los textos norteamericanos cuando hablan de los jurados compuestos por vecinos del lugar de los hechos y que, a su vez, remite al antecedente de venerable antigüedad de los tribunales de los "Heliastas" ateniense..., como bien afirma Vázquez Rossi, (ob. cit. t. 1, p.195).

Así, podemos definir el perfil del modelo acusatorio en base a los siguientes presupuestos: a) clara diferencia entre acusación y jurisdicción, a través de diferentes órganos que los representan; b) iniciación de la acción de acusación por el organismo oficial correspondiente o por el damnificado; c) desarrollo concentrado en una breve actividad dirigida a determinar la elevación a juicio y, eventualmente un debate oral donde se producirá y analizará la prueba que motivará la decisión del juzgador; d) privilegio del contradictorio y amplia libertad probatoria; e) decisión basada en el sistema de la libre convicción o sana crítica racional o, en el caso de jurados, íntima convicción al dictar el veredicto; f) Juez técnico y jurados legos o tribunal de jueces letrados.

El sistema mixto, de amplia difusión en las legislaciones de Europa central, combina características de ambos modelos, aunque, como expresa Maier, no pasa de ser "un inquisitivo reformado", (conf. aut cit., "Balance y propuesta del enjuiciamiento penal del siglo XX", citado por Vázquez Rossi, ob. cit., p. 216.).

Como expresáramos precedentemente, la normal culminación del juicio es el pronunciamiento judicial conocido como sentencia. Al respecto es importante efectuar una breve referencia a la diferencia conceptual entre veredicto y sentencia y el significado que le atribuye el nuevo código provincial a ambos términos. Se entiende por veredicto, según la acepción del nuevo ordenamiento, el pronunciamiento jurisdiccional sobre los hechos de la causa y que puede resultar absolutorio o condenatorio, correspondiendo el dictado de sentencia en el último caso, (art. 375 CPP).

No obstante la distinción del código entre ambos pronunciamientos, coincidimos con la interpretación conceptual de Bertolino respecto a que en el supuesto de absolución, la sentencia es el solo y propio veredicto, (conf. ob. cit. pág. 433), habida cuenta que, a tenor de lo normado en el art. 105 del rito, se dicta sentencia para poner término al proceso después de su íntegra tramitación, es decir que el veredicto absolutorio importa cabalmente una sentencia, criterio que también adopta el art. 482 para referirse a los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte. Por ello, consideramos clara la interpretación de De la Rúa al expresar refiriéndose a la sentencia que posee: "... carácter esencial en el efecto conclusivo de la decisión con relación al proceso, en primer término, y al agotamiento de la cuestión planteada, en segundo lugar. Aquello ocurre por la resolución de la causa en la culminación de las instancias ordinarias sin posibilidad de renovar su examen *ex novo ed in totum* ante un tribunal de grado superior y dentro del mismo proceso; esto, por la extinción de la acción sin posibilidad de replantear la misma cuestión por otra vía y en un proceso nuevo. Si la

causa puede proseguir en el mérito, o si el asunto puede renovarse en otro juicio, no existe, por regla, sentencia definitiva...", ( conf. "El recurso de casación", " pág. 418).

En relación al recurso de casación, del texto legal se infiere que es procedente en los casos de inobservancia o errónea aplicación del derecho por un órgano jurisdiccional inferior, (art. 448 CPP), excluyendo, -salvo determinados casos que trataremos posteriormente-, el análisis de los hechos y la valoración de la prueba, lo cual, como es sabido, obedece a que el *ad quem* careció de la percepción directa en la producción de aquella como el juez o tribunal *a quo*.

La impugnación procede contra las sentencias definitivas y las resoluciones que "... pongan fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad o corrección; o imposibiliten que continúen; o denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción penal.", (conf. art. 450 CPP).

También se contempla la procedencia del recurso cuando se aleguen nuevos hechos o medios probatorios que *per se* o conectados con los examinados en el juicio, demuestren la inexistencia del hecho o que el imputado no fue su autor, consignando como motivos especiales de casación a los enumerados al tratar la acción de revisión.

Como expresáramos *retro*, se mantiene el carácter extraordinario del recurso, seguido por la gran mayoría de las legislaciones, contemplando la revisión de la cuestión materia de juzgamiento en el marco de las causas taxativamente enunciadas por la ley, es decir la inobservancia o errónea subsunción de los hechos en un precepto legal o doctrina jurisprudencial aplicable al caso, sin que constituya atribución del Tribunal ingresar en el mérito de la plataforma fáctica fijada por el *a quo*, excepto en determinados casos de arbitrariedad o absurdo en la valoración de la prueba que configuran supuestos de violación de la ley y, en consecuencia, devienen materia de casación.

## INTRODUCCION.-

Como construcciones del pensamiento humano, las decisiones judiciales están sujetas a errores e injusticias que, en el caso del derecho penal implican un posible perjuicio de magnitud tal que merecen una amplia interpretación en materia recursiva. Así, la amenaza de sanción como corolario del pronunciamiento torna de suma importancia la aplicación de la regla del "doble conforme", la cual estipula que cuando una operación aritmética se realiza dos veces y arroja el mismo resultado, existen grandes posibilidades de que sea exacta, (conf.



## INDICE

ANTECEDENTES.....	P. 1
INTRODUCCION.....	P. 10
EL JUICIO ORAL.....	P. 25
DEBATE.....	P. 42
DESARROLLO DEL DEBATE.....	P. 54
JUICIO CORRECCIONAL.....	P. 88
QUERRELLA.....	P. 89
JUICIO ABREVIADO.....	P. 89
SENTENCIA ARBITRARIA.- ABSURDO.- RECURSO DE CASACION.....	P. 91
MOTIVOS DE CASACIÓN.....	P. 93
ERROR IN IUDICANDO.....	P. 94
ERROR IN PROCEDENDO.....	P. 97
SENTENCIA ARBITRARIA.- ABSURDO.- CONTROL DE LA CASACION.....	P. 101
SENTENCIA ARBITRARIA Y ABSURDO.....	P. 104
CONCLUSIONES.....	P. 110
BIBLIOGRAFIA.....	P. 114